



DECLARACIÓN POLÍTICA DEL COMITÉ FEDERAL ELECCIONES EUROPEAS 2014





INTRODUCCIÓN

Las elecciones europeas del 25 de mayo serán las más ciudadanas de cuantas se han celebrado hasta ahora. Los votos no solo establecerán la composición del Parlamento Europeo con más competencias de la historia, sino que también determinarán con qué mayoría parlamentaria y con qué programa político se elige al futuro Presidente de la Comisión Europea. Desde las primeras elecciones de 1979, ésta será la primera vez que los ciudadanos eligen directamente al Presidente del 'Gobierno Europeo'.

Con su voto, los europeos van a tener la ocasión de impulsar un cambio radical a la política que en los últimos años ha impulsado la derecha europea. Una política marcada por la austeridad obsesiva y la ausencia de estímulos al crecimiento. Una política definida por la inhibición ante el gravísimo problema del paro que castiga con especial virulencia a países como España, el recorte de derechos sociales y la negación de futuro a una generación entera de jóvenes. Una etapa caracterizada por el regreso de los egoísmos nacionales, la resistencia a la cohesión territorial y social, el rechazo a la solidaridad interna y la indiferencia hacia la desigualdad.

El proceso de construcción europea constituye, en su conjunto, una inequívoca historia de éxito. Pero hoy, en medio de una crisis que es a la vez económica social y política, la Unión Europea está en serio riesgo de perder el sentido último de su identidad.

Muchos ciudadanos perciben las políticas europeas como ineficaces para hacer frente a los duros efectos que la crisis ha ocasionado en sus vidas. Es más, una amplia mayoría ha sentido sus decisiones como interferencias externas, imposiciones o exigencias inapelables.

Esos mismos ciudadanos han percibido que la Unión no ha sido capaz de poner freno a los poderes económicos y mercados financieros que han originado la crisis. Muy al contrario, han entendido que se usaban los impuestos de la gente para salvar a los que se aprovecharon de la desregulación para obtener beneficios obscenos, a los que con comportamientos opacos y de alto riesgo se habían enriquecido previamente a su costa, y cuyas consecuencias desastrosas ha acabado pagando, con grandes sacrificios, el conjunto de la sociedad.





A esos ciudadanos debemos dirigirnos. Para compartir con ellos el diagnóstico de que los resultados negativos de esa gestión son evidentes: la cohesión se ha deteriorado, la desigualdad se ha disparado, la pobreza se ha multiplicado y la legitimidad democrática se ha debilitado.

Nos dirigimos a esos ciudadanos para convencerles de que hay una alternativa. Otras mayorías habrían gestionado la crisis de otra manera y con otras consecuencias. Por eso hay que cambiar a esa mayoría, empezando por la Comisión y el Parlamento Europeo.

Los socialistas queremos explicar con claridad que en Bruselas se toman cada día grandes y pequeñas decisiones que benefician o perjudican a los ciudadanos. Si se toman mal no es porque Bruselas esté lejos, sino porque quienes las toman están lejos de los ciudadanos. Lo decisivo no es el lugar donde se toman esas decisiones sino quiénes las toman, con qué proyecto político y sirviendo a qué intereses. Es eso, son esos, quienes han tomado las decisiones hasta el momento, a los que tenemos que cambiar.

Nosotros, los y las socialistas españoles y europeos tomamos la opción del cambio con el objetivo de volver a hacer de Europa un proyecto que soluciona los problemas de la gente, para volver a construir una Europa con rostro humano.







UNA ESTRATEGIA EUROPEA PARA CREAR EMPLEOS DE CALIDAD Y SALARIOS DIGNOS

Al acabar 2013, la tasa de desempleo del conjunto de la Unión se acercaba al 11%. Este porcentaje engloba a más de 26 millones de personas, frente al 6'7% de Estados Unidos, el 5% en Australia, el 7% en Canadá, o incluso por debajo del 5% en Japón.

Si consideramos los dos últimos años gobernados por el PP, en España se han destruido un millón de empleos, hay más de 600.000 desempleados más, ha caído la población activa, han aumentado en cerca de un millón los parados de larga duración, ha caído en 15 puntos la tasa de cobertura del desempleo, se ha llevado a cabo una fuerte devaluación de los salarios, se ha congelado el Salario Mínimo Interprofesional, ha disminuido el trabajo indefinido y subido la precariedad, se ha producido una intensa sustitución del empleo a tiempo completo por tiempo parcial, ha disminuido drásticamente el número de trabajadores protegidos por convenio colectivo y se ha disparado la pobreza.

Especialmente preocupante es la situación de las mujeres. En los dos últimos años se han perdido casi 500.000 empleos femeninos, el desempleo de las mujeres está en máximos históricos -un 27%-, y por primera vez en 40 años está cayendo la población activa femenina, confirmando la expulsión de las mujeres del mercado laboral. El resultado es que las mujeres son y serán más pobres a lo largo de toda su vida.





Ese es el efecto combinado, en Europa y en España, de los planes drásticos de reducción de los déficits fiscales y sus gravísimas consecuencias sobre el crecimiento y el empleo.

Ese es el drama que grita desde las estadísticas, pero que las estadísticas describen mal, con frialdad. Quien pierde su trabajo, o quien no tiene oportunidad de acceder a uno, se siente seriamente amenazado por la exclusión y se distancia e irrita, con argumentos comprensibles, de la política y de las instituciones.

Frente a esta situación de emergencia, que pone en grave riesgo el modelo del Estado del Bienestar y el pacto social, los socialistas proponemos resituar un crecimiento robusto y la creación sostenible de empleo digno en el centro de las políticas de la Unión.

Como se afirma en el manifiesto de Roma firmado por todos los partidos socialistas europeos, "la creación de empleo es nuestra prioridad: los hombres y mujeres de Europa deben tener un trabajo digno que les permita disfrutar de una buena calidad de vida".

La creación de empleo para las y los jóvenes es un reto que nos definirá ante ésta y la próxima generación, y seguirá siendo una de nuestras prioridades clave. Por ello, nos comprometemos a triplicar hasta los 21.000 millones de euros el presupuesto actual de la Garantía de Empleo Juvenil y a ampliarla para que abarque a las personas menores de 30 años. Pero también reforzaremos, dentro del Fondo Social Europeo, los programas destinados a los desempleados de larga duración mayores de 50 años, otro de los colectivos más necesitados de políticas públicas en nuestro país.

Para crear empleo, nos comprometemos a impulsar una nueva política industrial con el objetivo de elevar del 15% al 20% el peso del PIB de la industria europea, consolidando la pequeña y mediana industria y fomentando las reconversiones industriales en los sectores estratégicos de la UE puesto que no debemos dejar abandonadas a las víctimas del cambio tecnológico, la crisis y la globalización. Para ello, impulsaremos una política de innovación y desarrollo accesible, también, a la pequeña y mediana empresa y dotaremos de recursos suficientes los fondos europeos destinados a ello, como el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización.

Queremos acabar con el dumping social eliminando la explotación de los trabajadores y los contratos precarios que afectan a tantos europeos. Promoveremos normas estrictas que garanticen la igualdad salarial, el trabajo de calidad y la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y





fortaleceremos el diálogo social y la legislación contra la discriminación. Estableceremos un marco europeo de salarios mínimos para que los Estados miembros, considerando su nivel relativo de desarrollo, el coste de la vida y el salario medio de cada Estado Miembro, aseguren a todos los trabajadores un salario digno y suficiente.







UNA NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA QUE IMPULSE EL CRECIMIENTO Y LA CREACIÓN DE EMPLEC

Debemos impulsar un giro completo a la política económica de los últimos años, frenar sus consecuencias más negativas y reiniciar el crecimiento dirigido a la creación de empleo.

No habiendo sido el origen de la crisis iniciada hace seis años, la Unión Europea ha sido la región del mundo donde sus efectos se han sentido y se siguen sintiendo más intensamente y por un periodo de tiempo más prolongado.

Las razones hay que buscarlas en los errores de política económica cometidos para encarar la crisis, en el diseño incompleto de la gobernanza económica y en los límites de manejo de la política monetaria, en la parálisis o extrema lentitud en la toma de decisiones y en la carencia de una visión compartida y de una estrategia global.

Hay dos razones ideológicas que explican el fracaso de la estrategia económica llevada a cabo en la Unión Europea. En primer lugar, la falta de solidaridad de los Estados Miembros con mayor capacidad económica hacia aquellos que experimentaban los mayores problemas y las mayores tensiones.





Han sido esas dudas lo que ha proyectado más desconfianza sobre la sostenibilidad del euro en momentos de aguda fragmentación monetaria. Cuando el Banco Central Europeo envió un mensaje cristalino de que iba a hacer todo lo necesario para sostener el euro, la desconfianza desapareció y las primas de riesgo comenzaron a estabilizarse. En segundo lugar, el enfoque ideológico de las medidas adoptadas que han impuesto una determinada y sesgada versión del modelo social. Es decir, que han aprovechado la crisis, y promovido la austeridad extrema como la única receta posible, para avanzar hacia sus premisas de Estado reducido, prestaciones sociales recortadas, derechos laborales eliminados, interlocutores sociales orillados.

Con planteamientos muy cercanos a los que siempre hemos propuesto los socialdemócratas europeos, la respuesta del Gobierno de los EEUU y la política de la Reserva Federal permitió salir antes de la crisis, crear empleo y emprender pronto un crecimiento considerable.

Por todo ello es imprescindible darle la vuelta a la dinámica pasada, empezando por un calendario distinto de reducción fiscal que facilite el crecimiento y ligándolo a la evolución del crecimiento y el empleo. Según estudios de distintos institutos y fundaciones económicas europeas, limitando el proceso de consolidación fiscal a lo que se establece actualmente en los tratados europeos (una reducción mínima del 0,5% del PIB nominal anual) se conseguiría un ahorro de 85.000 millones de euros anuales en la zona euro, lo que supone un amplio margen de maniobra para impulsar el crecimiento.

Igualmente, defenderemos la puesta en marcha de un sistema de mutualización de deuda que traería beneficios tanto para las economías fuertes como para las débiles, reduciría el coste del servicio de la deuda así como la inestabilidad de los mercados financieros.

La lucha contra el fraude y la evasión fiscal (que representa aproximadamente un billón de euros al año) son elementos clave para conseguir un sistema fiscal justo. Reducir a la mitad la evasión fiscal para 2020 y combatir los paraísos fiscales serán prioridades centrales. Si acabáramos con la evasión fiscal, toda la deuda europea podría pagarse en 9 años. Por ello, defendemos la erradicación inmediata del secreto bancario, la obligación de intercambio automático de información fiscal, la aprobación de normas que aseguren la transparencia y prevengan comportamientos fiscales oscuros y el fortalecimiento de la cooperación transfronteriza.





Para impulsar políticas que favorezcan el crecimiento y la creación de empleo es necesaria, también, la sostenibilidad de los ingresos. Trabajaremos para la plena operatividad del Impuesto sobre las Transacciones Financieras. Esta tasa no solo tendría efectos recaudatorios, sino, sobre todo, de control de movimientos especulativos o fiscalmente elusivos, así como de asegurar una justa distribución del sector financiero a las cargas sociales.

Los europeos y europeas se han visto obligados a pagar por los errores y la irresponsabilidad de un sector financiero no regulado. El rescate de los bancos ha costado 1,6 billones de euros a los contribuyentes europeos. Nos aseguraremos de que nunca más los bancos vuelvan a apostar con la vida de la ciudadanía. Estableceremos sin dilación un marco adecuado que haga que el sector financiero trabaje al servicio de la economía real y aporte su parte correspondiente a la sociedad. Proponemos la rápida conclusión de la Unión Bancaria de manera que sea plenamente operativa la supervisión por el BCE, rápido el funcionamiento del Mecanismo de Resolución Bancaria, y claramente más potente el Fondo de Resolución, financiado por las aportaciones de las propias entidades financieras. Una Unión Bancaria, en definitiva, para que en el futuro, los rescates de los bancos lo paguen los bancos.

Uno de los pilares de un nuevo patrón de crecimiento económico debe estar basado en los principios de la economía verde y del desarrollo sostenible. La UE debe recuperar el liderazgo en la protección del medio ambiente, los recursos naturales, y en la lucha contra la contaminación y el cambio climático. Para ello es necesaria una estrecha colaboración con el resto de países y predicar con el ejemplo. Apoyaremos las tecnologías limpias y un sistema productivo sostenible, apoyaremos más objetivos vinculantes en relación con un mayor uso de las energías renovables y el aumento de la eficiencia energética. Lucharemos contra la pobreza energética y garantizaremos un acceso mínimo a la energía para todo el mundo. Potenciaremos un desarrollo rural sostenible que luche contra la desigualdad entre lo rural y lo urbano y combata la despoblación. Trabajaremos para que la política agraria común apueste decididamente por los agricultores y ganaderos profesionales y por unas fuertes medidas de intervención de los mercados para que ellos mismos puedan vivir del mercado. Seguiremos vigilantes en una política pesquera común beneficiosa para nuestro sector pesquero.

El Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales deben conservar su soberanía e implicarse por completo en el ejercicio del control democrático sobre dichas políticas. El legado de la Troika en este sentido refleja un claro fracaso. Una vez finalizadas las misiones de la Troika, es necesario establecer otro modelo, en el marco de los Tratados de la UE, que sea democrático, socialmente responsable y creíble.





UNA AGENDA EUROPEA EN CONTRA DE LA DESIGUALDAD

La lucha contra la desigualdad es una de las señas de identidad de los socialistas. Hoy, en medio de sociedades que, aún en crisis, tienen un alto nivel de desarrollo y bienestar, hay más razones que nunca para enfrentarnos a esa lacra que divide dramáticamente las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. Cada vez hay más evidencia de que la desigualdad está en el fondo de la crisis que vivimos desde 2008, y de que es un freno a la recuperación económica y al crecimiento equilibrado.

El desempleo es la principal causa de esta desigualdad pero, significativamente, también se ha incrementado la pobreza entre los trabajadores, como consecuencia de las tendencias de precarización laboral, las devaluaciones salariales y los recortes sociales. De hecho, salir de la pobreza se ha convertido en algo difícil incluso cuando se encuentra un empleo, como demuestra que solo lo hicieran la mitad de los europeos que encontraron un empleo en 2013.

La crisis económica y las consecuencias de la estrategia obsesiva y excesiva de austeridad fiscal llevada a cabo por la Comisión Europea, liderada por una mayoría ideológica de derechas ha disparado la desigualdad entre los ciudadanos y entre los Estados miembros a niveles jamás observados desde el inicio de la construcción europea. La austeridad y las reformas estructurales impuestas en el mismo sentido han empujado cada año a millones de ciudadanos al desempleo y al mismo tiempo han erosionado los sistemas de protección social existentes.

Y en este incremento de las desigualdades tiene especial relevancia el aumento de las desigualdades entre mujeres y hombres a todos los niveles de la escala social, puesto que las mujeres siempre son quienes tienen menos ingresos, salarios más bajos, incluso entre las mujeres directivas, y menores





pensiones. Además las mujeres afrontan con mayores dificultades los riesgos de la pobreza, puesto que, en su mayoría, asumen responsabilidades familiares importantes en ausencia de servicios de cuidado.

Pero la desigualdad no sólo se mide en términos de pobreza y exclusión social sino también en términos de igualdad en el acceso a servicios como la educación o la sanidad de calidad, así como a un nivel de vida digno.

La estrategia económica actual ha desdibujado las señas de identidad del proyecto europeo basados en la solidaridad y en la cohesión social. Estamos en la Europa de las divergencias, no de las convergencias:

- La Gran Recesión ha dejado un coste social inasumible para una economía desarrollada, ha
 interrumpido y revertido en cinco años gran parte de los niveles de convergencia real entre
 Estados que habíamos logrado alcanzar desde los años 90.
- Actualmente 124,5 millones de ciudadanos europeos viven bajo el umbral de la pobreza (el 24,8% de la población en la UE llegando a superar el 35% en países como Grecia).
- Los niños han constituido año tras año el grupo de población en mayor riesgo de pobreza y exclusión social llegando a afectar en 2013 al 30% de los mismos de entre 0-17 años.
- El gasto en protección social ha disminuido en casi todos los Estados miembros y el Comité de Protección Social (CPS) advierte sobre el aumento del número de personas en situación de riesgo por renta inferior al umbral de la pobreza, pobreza infantil, necesidades médicas no cubiertas, graves carencias materiales y exclusión social;
- Los impuestos se han hecho cada vez menos progresivos y la carga fiscal sobre las rentas más bajas es muy elevada de acuerdo con los datos aportados por la CE.

La crisis ha afectado igualmente a la brecha salarial de género, y ha incrementado el desempleo femenino. Debido a las políticas marcadas por la austeridad y el recorte de los servicios públicos y las prestaciones sociales, esa brecha volvió a dispararse, dada la mayor presencia de las mujeres en los sectores recortados, que llega a alcanzar hasta el 70%. A ello se añade la vuelta de un sector considerable de las mujeres al trabajo no retribuido, como el cuidado familiar o a dependientes, como ha sucedido especialmente en España por el abandono de las políticas de dependencia. Las familias que dependen del salario o de la pensión de una mujer son significativamente más pobres, porque la brecha salarial y de pensiones sigue siendo muy alta.





Para cambiar, radicalmente, esta terrible tendencia, trabajaremos intensamente por una verdadera Unión Social, por una Europa que no deje a nadie atrás. Para ello, proponemos el establecimiento de un mínimo social en cuanto al gasto social dedicado en los presupuestos públicos. Trabajaremos para que, en el marco del semestre europeo, se mejore la adecuación y eficacia de los sistemas de protección social y velaremos para que éstos sigan actuando como amortiguadores de la pobreza y la exclusión social.

Creemos necesaria la creación de indicadores sociales vinculantes en pie de igualdad con los indicadores macroeconómicos, sobre todo pobreza infantil, acceso a la asistencia sanitaria, carencia de hogar y un índice de calidad en el empleo. Lo que contribuirá a fortalecer la supervisión de la evolución en materia social y de empleo como parte de la vigilancia macroeconómica en el marco del Semestre Europeo.

Proponemos la creación gradual de una renta mínima de inserción que cubra las necesidades básicas de los ciudadanos europeos. Se trata de introducir redes últimas de protección social para aquellas personas sin recursos o con recursos insuficientes para evitar que estén abocados a la pobreza y exclusión social.

Por último, los socialistas defenderemos la fijación de compromisos obligatorios que acaben de una vez con la brecha salarial y de pensiones que sufren las mujeres, así como el recurso al Fondo Social Europeo y a otros programas europeos para promover una mayor integración social a través del empleo en torno a un plan europeo en contra de la brecha salarial.

En nuestra ambición de una Europa en igualdad, trabajaremos en políticas dirigidas a combatir la discriminación y la desigualdad de trato en el acceso y permanencia en el empleo y en todos los ámbitos de la sociedad, de aquellos grupos que pueden sufrir discriminación por motivos de sexo, etnia, origen, orientación sexual, discapacidad, edad, y cualquier otra circunstancia personal o social.





LA UNIÓN EUROPEA COMO UN ESPACIO COMPARTIDO DE CIUDADANÍA, DERECHOS Y LIBFRTADES

Algunos de los riesgos más intensos que afronta hoy la Unión se sitúan en el ámbito de los derechos y libertades. Las derivas autoritarias de no pocos estados miembros, las violaciones a los derechos de privacidad y protección de datos, las barreras directas o indirectas a la libre circulación de personas y las dificultades por las que atraviesa el sistema Schengen, las políticas que algunos países de la UE aplican a la inmigración, el ascenso de los nacionalismos y los populismos, figuran entre los más significativos.

La posición de los socialistas está marcada por la profunda convicción de que el proyecto europeo es ante todo una expresión compartida de ciudadanía. Por ello no aceptamos su reducción a un simple mercado, a un mero espacio económico abierto. Pero constatamos que el espacio de ciudadanía, justicia, derechos, libertades y seguridad avanza muchísimo más fatigosamente que el de mercado único, encuentra mucha más resistencia que éste y se enfrenta a quiebras mucho más frecuentes y repetidas.





Entre ellas, la que se está produciendo en España a través de la nueva Ley de Seguridad, destinada a amedrentar y perseguir la contestación ciudadana más que a proteger a esos ciudadanos de auténticas amenazas. Entre ellas, y muy significativa, la negación del derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad que, además de conculcar su libertad, supone un anacronismo en el ámbito de la Unión.

Por todo ello, lucharemos por el pleno reconocimiento, a nivel europeo, del derecho de las mujeres a la salud reproductiva y sexual frente a la reacción conservadora que pretende una vuelta atrás en los derechos largamente peleados y conquistados hace décadas. De la misma forma que seguiremos en la vanguardia de la lucha contra toda forma de racismo, sexismo, homofobia, transfobia y contra todo tipo de intolerancia.

Nos comprometemos a impulsar todas las medidas necesarias para luchar en todos los frentes contra la lacra de la violencia de género con el objetivo de erradicarla de la realidad social Europea. Para ello promoveremos una estrategia integral contra la violencia de género que incluya medidas de prevención y de protección. En el mismo sentido, impulsaremos una directiva europea para garantizar, al más alto nivel, la lucha contra esta lacra social en todo el espacio comunitario.

Defenderemos activamente la libre circulación de ciudadanos y ciudadanas europeos en el seno de la Unión como uno de los mayores logros de ésta que simboliza, para muchos, el espíritu real de Europa, una clave decisiva de su identidad. Por eso garantizaremos que en todos los países se mantengan los derechos civiles vinculados a la situación familiar de las personas que se trasladan y de sus familias, independientemente de la regulación sobre el matrimonio y la convivencia existente en cada país.

Para evitar más tragedias humanas, debemos demostrar una solidaridad real entre todos los Estados miembros en materia de política de inmigración y asilo, y contar a su vez con recursos suficientes. Queremos que existan políticas de integración y participación efectivas y ayuda para los países de los que provienen los inmigrantes para hacer una verdadera política de inmigración europea basada en tres pilares; prevención, protección e integración.

Consideramos cada vez más imprescindible una clara estrategia europea sobre el crimen organizado y la delincuencia económico-financiera, y proponemos acabar con la complejidad, fragmentación e ineficiencia del intercambio de información policial.





Asimismo seguiremos impulsando la lucha contra el terrorismo internacional por medio del intercambio de información entre la Unión y países terceros, la localización de los recursos financieros de los terroristas y la persecución del tráfico de armas.

Los socialistas asociamos los derechos con la transparencia. Por eso abogamos por un gobierno transparente de la Unión, en donde los ciudadanos tengan derecho a acceder a los documentos en los que se fundamentan las decisiones que legisladores y gobernantes toman en su nombre. Por eso, presionaremos para acabar con el largo bloqueo de la revisión del Reglamento de acceso público a documentos.





DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

En la Europa de la crisis, abonados por la incertidumbre y el miedo, han surgido con fuerza respuestas populistas, extremistas, xenófobas y eurofóbicas, que encuentran hoy un campo disponible para su expresión partidaria. No son manifestaciones aisladas, ni afloran en países de tradición democrática no consolidada.

Como socialistas, tenemos la tarea fundamental de recuperar la democracia como eje vertebrador de las decisiones políticas que organizan la vida colectiva, que deben volver a las manos de las instituciones que representan a la gente. Sin política democrática no hay capacidad para decidir entre opciones distintas atendiendo a la voluntad popular, sin poder para defender la primacía de los intereses de la mayoría no puede haber política progresista.

Los socialistas nos comprometemos con la regeneración de la democracia europea como la única estrategia posible para afrontar ese distanciamiento, como la única eficaz para asegurar la hegemonía de los valores de libertad, justicia y progreso.

Defenderemos propuestas que revitalizan la democracia europea. Entre ellas, el establecimiento de una circunscripción electoral común de, al menos, 50 eurodiputados, con composición plurinacional y a cuya cabeza figuraría el o la candidata de cada familia política a presidir la Comisión, además de promover un sistema electoral europeo más homogéneo entre los estados miembros.

Promoveremos las reformas necesarias para que el Parlamento Europeo cuente con poderes de iniciativa legislativa al mismo nivel que la Comisión Europea, así mismo promoveremos la ampliación





de las competencias del Parlamento Europeo en el ámbito económico y monetario y daremos un impulso más decidido a la Iniciativa Ciudadana Europa como instrumento de participación política.







EUROPA EN EL MUNDO

En el siglo XXI, con grandes actores que emergen con economías dinámicas y cada vez más tecnológicas, demografías pujantes y legítimas aspiraciones de jugar un papel equivalente en el escenario mundial, la Unión Europea tiene que asumir con realismo y con determinación que sólo continuará siendo un actor global relevante si actúa como tal y se hace representar con una voz común.

La Europa que queremos tiene una dimensión exterior enmarcada en la búsqueda de la paz, la estabilidad, la cooperación, la gobernanza global, la solidaridad, los cauces de diálogo, y una concepción interdependiente de las relaciones internacionales.

Con 500 millones de habitantes, el 25% del PIB mundial, quinta potencia comercial y primer donante de ayuda al desarrollo, Europa es un actor global relevante y tiene que asumir sus responsabilidades en la gobernanza global.

Pero sólo puede hacerlo expresándose con una sola voz, con un solo mensaje portador de unos mismos valores, en un mundo cambiante en el que proliferan las crisis que requieren respuestas de la Unión Europea, la UE debe asumir su responsabilidad como un actor global con estrategias sostenibles en el tiempo.

Solo puede hacerlo unida en un mundo globalizado en el que a medida que crece el peso relativo de los países emergentes, disminuye el de la UE, y por supuesto el de sus Estados miembros, ninguno de los cuales podrá afrontar individualmente los retos energéticos, demográficos, financieros o de seguridad a los que ya hay que dar respuesta.

Los socialistas nos comprometemos a trabajar para dar coherencia y consistencia a esa voz de la UE en el mundo, garantizando los principios que inspiran la acción exterior de la Unión especialmente en lo que se refiere a la cooperación para el desarrollo, expresión de la solidaridad europea más allá de sus fronteras de la que nos sentimos orgullosos y que no debe verse menoscabada por la crisis económica ni afectada por las políticas de austeridad impuestas por la derecha.





Para nosotros, la política exterior de la Unión debe estar marcada por nuestros valores más irrenunciables. Queremos que siga siendo el actor más importante en cooperación al desarrollo. Queremos que sean un éxito los resultados de los Objetivos del Milenio, y que se alcance un compromiso ambicioso para después de 2015. Mantenemos nuestra apuesta firme por el establecimiento de una tasa sobre las transacciones financieras con la que contribuir a la financiación de políticas solidarias. Creemos en el trabajo conjunto de las instituciones comunitarias con las organizaciones no gubernamentales de cooperación y ayuda humanitaria, sin las que la UE no estaría a la cabeza de la cooperación internacional. Consideramos que la política de inmigración de la UE no puede desligarse de la política de cooperación con los países de origen de los emigrantes.

Promoveremos el pleno cumplimiento de los derechos humanos, trabajaremos para erradicar la pena de muerte y nos proponemos ser coherentes en la defensa de quienes, fuera de nuestras fronteras, luchan contra el totalitarismo y por la construcción de estados de derecho. Para ello, seremos vigilantes para que todos los acuerdos bilaterales que firme la Unión Europea con terceros países incorporen cláusulas de respeto de los derechos humanos, los derechos sociales y los estándares medioambientales que establecen los convenios internacionales. Estaremos especialmente vigilantes a los ataques de los derechos fundamentales a las mujeres, a las minorías y a las personas LGTB que se producen en diversos países del mundo.

Y sobre todo, trabajaremos para construir una verdadera Acción Exterior Europea asegurando una única y fuerte voz en el conjunto de las organizaciones internacionales existentes en las que la Unión Europea debe aparecer como tal y no representada a través de una pluralidad de países individuales.



